

ANTECEDENTES SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE TABACO CALENTADO

ÁMBITO INTERNACIONAL

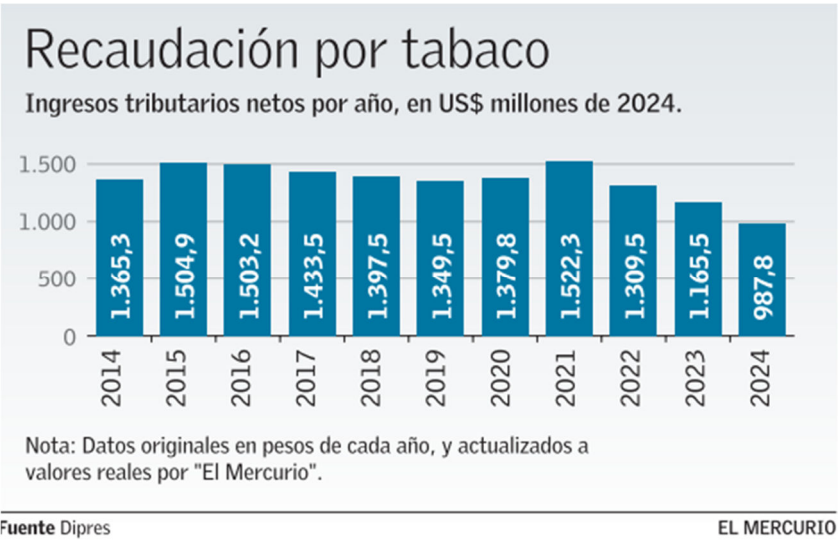
1. Los principales mercados del tabaco calentado, actualmente, son Japón, Corea del Sur, Italia, Polonia y Rusia.
2. En Italia, de acuerdo a un estudio del año 2021 (financiado por BAT y con actualización al año 2022), se observa una continua caída del consumo del tabaco tradicional y, por el contrario, un aumento del tabaco calentado en sólo 3 años, superior a 200%, concentrado en jóvenes.
3. El mismo estudio muestra que, consistente con lo anterior, el tabaco calentado se ofrece ilícitamente al público joven italiano a través de sitios online que venden sticks provenientes de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Georgia y Panamá. Aunque los pagos se realizan a través de medios tradicionales, también se admite bitcoin en algunos casos.
4. Otro estudio (hecho el 2022 con la colaboración de PMI) señala que, en principio, estos productos son originales pero contrabandeados a Italia porque provienen de un país con menores precios o impuestos a los mismos. Las características tecnológicas del tabaco calentado harían difícil su falsificación, pero no se debe descartar el contrabando de productos orientales que no contienen nicotina, sino que hierbas como el ginseng, y que evaden controles sanitarios.
5. En octubre de 2024, la Oficina Anti Fraude europea (OLAF), realizó una conferencia dedicada especialmente a combatir el contrabando de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado, reconociéndolo como una amenaza creciente.
6. El Servicio de Aduanas de Corea del Sur descubrió en marzo de este año una operación de contrabando de tabaco calentado y tradicional por US\$3.7 millones.

ÁMBITO SUDAMERICANO Y MEXICO

5. En el caso de los países latinoamericanos, la OMS ha sostenido la vinculación del tráfico de tabaco con el crimen organizado (en el contexto de la discusión parlamentaria del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco en Paraguay).
6. Esta vinculación parece más evidente en Mexico, donde el Cartel de Sinaloa se especializa en el comercio de tabaco extranjero, mientras que el Cartel Jalisco Nueva Generación se concentra en la producción nacional.
7. Insight Crime ha resaltado el papel del tabaco contrabandeadado desde Paraguay como una fuente de financiamiento para diversos grupos de crimen organizado de la región y lo mismo con fábricas clandestinas con mano de obra esclava en Brasil que financian las actividades del PCC y el CV.

ÁMBITO CHILENO

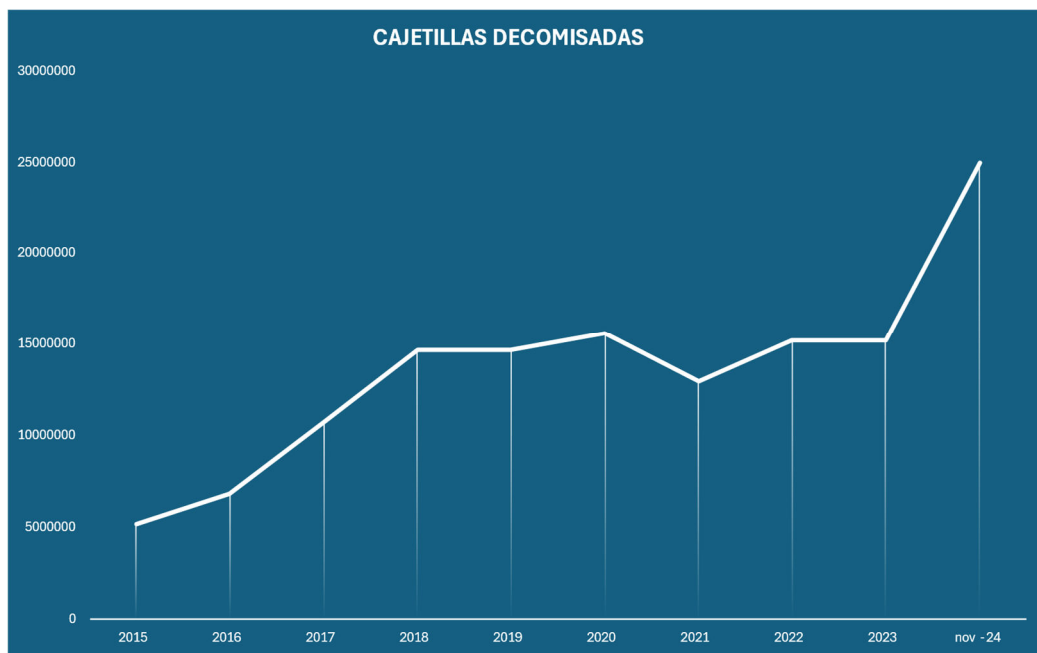
8. En Chile, el mercado del tabaco habitualmente se medía a través de la recaudación del impuesto específico. Esta recaudación estaría disminuyendo desde 2021.



9. Aunque se requiere mayor análisis respecto a las causas, este fenómeno coincide con el aumento del consumo de cigarrillos ilegales presentado por MIDE UC.



10. También se observa mayor actividad ilícita a partir del decomiso de cajetillas de cigarrillos ilegales de acuerdo con cifras de Aduana.



10. En cuanto a los vínculos con el crimen organizado, las condenas por asociación ilícita en que se incluya el contrabando de cigarrillos generalmente son por poco tiempo de privación de libertad, cuando no derechamente se remite condicionalmente la pena. Sin embargo, en la macrozona norte se dan casos graves en que individuos de distintas nacionalidades (peruanos e indios, específicamente) se reúnen para cometer el delito o, incluso, se ha confirmado la participación de carabineros.

PROYECTO DE LEY QUE AJUSTA LA PENA DEL DELITO DE ASOCIACIÓN CRIMINAL A OTRAS FIGURAS PENALES SIMILARES

La ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, estableció en el artículo 28 un tipo penal específico de asociación para el lavado de activos en los siguientes términos:

Artículo 28.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo algunas de las conductas descritas en el artículo anterior, serán sancionados por este solo hecho, según las normas que siguen:

1.- Con presidio mayor en su grado medio, al que financie, ejerza el mando o dirección, o planifique los actos que se propongan, y

2.- Con presidio mayor en su grado mínimo, al que suministre vehículos, armas, municiones, instrumentos, alojamiento, escondite, lugares de reunión, o colabore de cualquier otra forma para la consecución de los fines de la organización.

Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesorio de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.

Por otra parte, la ley N° 20.000, que sustituyó la Ley n° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, también contiene un tipo especial de delito relativo a la asociación y organización para delitos de narcotráfico:

Artículo 16.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley serán sancionados, por este solo hecho, según las normas que siguen:

1.- Con presidio mayor en sus grados medio a máximo, al que financie de cualquier forma, ejerza el mando o dirección, o planifique el o los delitos que se propongan.

2.- Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, al que suministre vehículos, armas, municiones, instrumentos, alojamientos, escondite, lugar de reunión o cualquiera otra forma de colaboración para la consecución de los fines de la organización.

Si el autor, cómplice o encubridor del delito establecido en este artículo cometiere, además, alguno de los delitos contemplados en esta ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal para los efectos de la aplicación de la pena.

Recientemente, la ley N° 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de

ganancias, estableció dos tipos penales distintos, distinguiendo si se era parte de una asociación para cometer crímenes o para cometer simples delitos. En el caso de la asociación criminal, la precitada ley dispuso:

Artículo 293.- Quien sea parte en una asociación criminal será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

La pena será presidio mayor en su grado mínimo si la participación consiste en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado.

Se entenderá por asociación criminal toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes.

Si la asociación tiene entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero.

Por último, la ley N° 21.732, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la Ley N° 18.314, también crea una figura específica para este tipo de delitos:

Artículo 1º.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

*La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de **presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.***

En los cuatro tipos penales señalados existe una penalidad especial para quienes, aparte de formar parte de la asociación, ejercen funciones de mayor relevancia. En especial, funciones de jefatura, mando o dirección:

	Asociación criminal general	Narcotráfico	Lavado de activos	Terrorismo	Asociación ilícita derogada
Jefatura de la asociación	Presidio mayor en su grado mínimo	Presidio mayor en sus grados medio a máximo	Presidio mayor en su grado medio	Presidio mayor en su grado medio	Presidio mayor en cualquiera de sus grados.

Como puede observarse, la pena asociada a los mismos roles relevantes de la asociación criminal del Código Penal es inferior a las asignadas por la ley a las mismas personas en las asociaciones cuyo fin sea cometer delitos de la ley de drogas (N° 20.000), el delito de lavado de activos (19.913) o delitos terroristas (21.732).

La diferencia mencionada en el párrafo precedente produce una desproporción injustificada, ya que una asociación criminal puede tener entre sus fines la afectación de bienes jurídicos personalísimos como la vida, y quien ejerce el mando en ella tendrá una pena menor que quien ejerce el mando en una asociación para el tráfico de drogas. Esto a su vez causa dificultades interpretativas en situaciones concursales entre asociaciones, algunas de ellas son:

1) Roles relevantes en asociaciones criminales para cometer delitos particularmente graves reciben una pena inferior a aquellas dedicadas al narcotráfico o al lavado de activos. Así, por ejemplo, el líder de una organización de sicarios cuyo único fin es prestar servicios a narcotraficantes, recibiría una pena inferior al líder de estos últimos, pese a que el primero puede tener decenas de homicidios a su haber y el segundo, ninguno.

2) La organización de una misma asociación criminal que, junto con los delitos de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, se conforme para llevar a cabo otros crímenes, conlleva a situaciones de concursos penales de diverso tipo que resultan de difícil resolución, en especial por sus consecuencias penológicas. Basta ponerse en el caso en que el lavado de activos o el narcotráfico son sólo una forma de proveer medios para la realización de otra actividad criminal organizacional que tiene una pena inferior a las asociaciones para cometer los otros dos delitos precitados.

3) Si comprendemos los delitos de organización del Código Penal y de leyes especiales como un sistema, en el que las asociaciones delictivas y criminales del Código Penal son la base del mismo, en el que el legislador de la Ley 21.577 señaló expresamente en el inciso cuarto del artículo 293 del CP: “Si la asociación tiene entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero”, esto es de difícil aplicación práctica si se trata de asociaciones cuyo fin es perpetrar crímenes tipificados en leyes especiales como las mencionadas y también crímenes del Código Penal, esto porque la pena de las asociaciones ya señaladas es mayor.

4) La pena de la antigua asociación ilícita (derogada por la Ley 21.577) en cuanto esta tuviera entre sus fines cometer crímenes y aplicable a roles relevantes como por ejemplo jefatura era: Artículo 293 (derogado por la Ley 21.577) “Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de **presidio mayor en cualquiera de sus grados**”.

Consideramos que esta diferencia de penas, que proviene del mensaje presidencial que dio origen a la ley N° 21.577, no tiene justificación razonable y, por lo anterior, proponemos el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 293 del Código Penal, por el siguiente:

“La pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados si la participación consiste en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado”.

PROYECTO DE LEY QUE FACULTA LA UTILIZACIÓN DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DE CONCESIONES MARÍTIMAS

El artículo 589 del Código Civil dispone que son bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y, si su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público.

Por su parte, el artículo 594 dispone que se entiende por playa de mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas.

El Decreto con Fuerza de Ley N° 340, de 1960, sobre concesiones marítimas, establece en el artículo 1° que al Ministerio de Defensa Nacional le corresponde el control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la República y de los ríos y lagos que son navegables por buques de más de 100 toneladas. Asimismo, el artículo 2° de dicho cuerpo legal establece que es facultad privativa del Ministerio de Defensa Nacional conceder el uso particular de cualquier forma “de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral; como asimismo la concesión de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías; y también las concesiones en ríos o lagos que sean navegables por buques de más de 100 toneladas, o en los que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extensión en que estén afectados por las mareas, de las playas de unos y otros y de los terrenos fiscales riberaños hasta una distancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera”.

Una de las formas de concesión de estos bienes fiscales y nacionales de uso públicos es a través de las concesiones marítimas; siendo las concesiones de acuicultura el otro caso.

Para la solicitud de estas concesiones se exigen diversos antecedentes, actualmente establecidos en el decreto N° 9, de 2018, del Ministerio de Defensa Nacional, que sustituye Reglamento sobre Concesiones Marítimas, fijado por Decreto Supremo (M) N° 2, de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional.

Dos antecedentes fundamentales que se requieren son: la naturaleza del sector solicitado (terreno de playa, playa, rocas, porción de agua, fondo de mar, río o lago) y

la descripción del área que se solicita, individualizando por separado cada sector de acuerdo a su objeto y los respectivos tramos según su naturaleza.

Los antecedentes señalados en el párrafo precedente se representan en otro requisito de la solicitud que es un plano en soporte digital en el formato que determine la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), coincidente con la solicitud presentada, de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto imparta la DIRECTEMAR, con la representación del área solicitada, individualizando cada sector según su objeto y sus tramos según su naturaleza, e ilustrando en el plano la línea de playa oficial y la línea del límite del terreno de playa, ambas aprobadas por resolución de la Dirección, así como la línea de más baja marea y la línea de relleno, según corresponda. Similar plano se requiere para otros trámites como la renovación de la concesión o su modificación.

La elaboración de estos planos requiere conocimientos cartográficos relevantes y, lamentablemente, escasos en nuestro país, lo que lleva a que una gran cantidad de los errores y correcciones que se dan durante el procedimiento y lo extienden innecesariamente se debe a consideraciones cartográficas, más que jurídicas o de conveniencia del uso solicitado. De igual manera, la contratación de los servicios necesarios por parte de la ciudadanía para contar con un cartógrafo competente en la materia es onerosa, en especial cuando se trata de concesiones menores para kioscos, caletas, pequeños restaurantes y otras actividades económicas.

El presente proyecto de ley, junto con reconocer legalmente la posibilidad de contar con una plataforma para la tramitación de concesiones marítimas -lo que ya se encuentra habilitado por el Ministerio de Defensa Nacional en el sitio web: <https://portalconcesiones.ssffaa.cl/> -, establece que esta plataforma puede contener la cartografía oficial -aquella que, para estos efectos, es aprobada por Resolución de la DIRECTEMAR- y, de esta manera, permitir a los solicitantes que utilicen en línea dicha cartografía para identificar las coordenadas de los sectores que buscan pedir, renovar o modificar, simplificando estos requisitos técnicos de la solicitud disponibilizando para todos la información territorial pertinente. De igual manera, el artículo dispone que la plataforma puede interoperar con otros servicios y organismos públicos, reconociendo el principio de interoperabilidad contenido en el artículo 16 bis de la ley N° 19.880 y, sobre todo, hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de eximirse de presentar documentos que consten en poder de otros órganos del Estado, reconocido en el artículo 17, letra d), del mismo cuerpo legal.

Por lo anterior, propongo el siguiente,

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO. Introdúcese, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 340, de 1960, sobre concesiones marítimas, a continuación del artículo 3°, el siguiente artículo 3° bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. El Ministerio de Defensa Nacional podrá poner a disposición de los solicitantes de concesiones marítimas una plataforma electrónica en que se puedan presentar las solicitudes de otorgamiento, renovación o modificación de las mismas, que contenga la cartografía oficial que permita a los solicitantes identificar las coordenadas de la solicitud, y pueda interoperar con otros servicios y organismos públicos cuyos antecedentes o datos que traten sean necesarios para resolver la solicitud.”